

Reclamo masivo por desaparecidos en la sede del gobierno de Argentina

(LPS, AFP, ANSA y EFE)

BUENOS AIRES, 14 de septiembre.—Aproximadamente medio millar de personas, en su mayoría familiares de detenidos y presos políticos, se congregó en la tarde de hoy frente a la Casa Rosada (sede del Poder Ejecutivo) y una comisión de los mismos hizo entrega de un memorial. Aproximadamente a las 17 hora local el grupo se hizo presente en la Plaza de Mayo y mientras permanecía pacíficamente instalado a la espera de la gestión que realizaba un núcleo reducido, detonaron petardos en la misma plaza, lo que motivó una rápida intervención policial. Los agentes rodearon el recinto y obligaron a despejar la zona, cosa que se logró parcialmente.

Los familiares reclaman por la liberación de los presos políticos sin causa judicial, el procesamiento por la justicia civil de los encausados y la aparición de los desaparecidos. Asimismo se han manifestado en contra de recientes disposiciones legales que autorizan al Estado a obtener por vía judicial un fallo de "fallecimiento presunto" para los desaparecidos.

Las bombas lanzaron panfletos que se titulaban "justicia para el pueblo" y firmaban "familiares de combatientes en apoyo de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)".

Se expresaba en los volantes "somos familiares de combatientes del pueblo que han caído en la lucha que todos tenemos el compromiso de llevar a cabo, cada uno desde su trinchera".

Agregaba que "nuestra responsabilidad es hoy luchar contra un gobierno reaccionario" y por "la libertad de todos los presos sin proceso ni causa, la aparición de los secuestrados y la aparición con vida de los 5 mil 581 desaparecidos".

El texto también convocaba a luchar por "el cese de todas las acciones represivas que aún continúan y que motivan esta petición".

Al cabo de la entrevista, que duró 90 minutos, los delegados de los familiares de desaparecidos descartaron toda responsabilidad de los mismos en relación a las bombas y calificaron al episodio como "una burda provocación".

Los voceros dijeron haber sido reconocidos oficialmente en la entrevista y que en la misma entregaron un petitorio por el restablecimiento del estado de derecho con 39 mil 800 firmas y otro rechazando la ley sobre los desaparecidos con 6 mil 700 firmas.

PERIODISTAS DESAPARECIDOS Y NUEVOS SECUESTROS

Mientras, familiares de hombres de prensa desaparecidos y detenidos por razones políticas elevaron una carta y documentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (SIDH), informando que en Argentina hay 68 periodistas desaparecidos (desde 1976 en adelante) y 80 detenidos.

En las listas que se entregaron a la CIDH, figuran entre los desaparecidos Haroldo Conti (conocido periodista y escritor), Julián Delgado (director del diario *Cronista Comercial*), Rodolfo Fernández Pondal (director del semanario *Última Clave*), Edgardo Sajón (director de *La Tarde*, ejecutivo de *La Opinión* y ex secretario de prensa de la Presidencia durante el gobierno del general Alejandro Lanusse), Marcelo Gelman (hijo de Juan Gelman, periodista exiliado radicado en Europa), Rodolfo Walsh (escritor y periodista), Rodolfo Guagnini (corresponsal de *El País*, de Madrid y de *Latin American Political Report*, de Londres), Juan José Azcone (redactor de *La*

Opinión), Enrique Raab (redactor de *La Opinión*). Y entre los detenidos el de mayor relevancia es Jacobo Timerman, ex director propietario del diario *La Opinión*.

Los juristas internacionales viajarán mañana a Tucumán (mil 400 kilómetros al noroeste de Buenos Aires) para escuchar denuncias de desapariciones.

Tras el anuncio de la llegada de la CIDH en esta región, donde entre 1974 y 1976 el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), implantó una guerrilla rural, las asociaciones humanitarias señalaron que el número de desapariciones denunciadas pasó de 180 a 400.

Por otro lado, se supo que Sergio Hugo Schilman, fue llevado de su casa el pasado 22 de agosto por personas que se auto-identificaron como miembros de la Segunda Unidad Regional de la policía santafecina, en Rosario.

Schilman ingresó en la clínica privada Cami de esa ciudad el día 28 de agosto con heridas en el tórax, los pies, el pene y las axilas, según determinó el parte de los médicos que lo asistieron.

Los facultativos comprobaron además que, 2 días después, el joven sufrió un ataque cardíaco y que, a partir de ese momento, se encontraba bajo constante vigilancia médica en terapia intensiva.

Schilman había denunciado que estuvo a disposición del II Cuerpo de Ejército —con asiento en Rosario— entre el 22 y 24 de agosto, periodo durante el cual dijo que fue torturado.

ACCION LEGAL CONTRA DIRIGENTE JUSTICIALISTA

Una acción legal contra el vicepresidente del Justicialismo, Felipe Deolindo Bittel, a raíz del manifiesto que presentó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), fue iniciada hoy por un juez de la provincia de Santa Cruz, 2 mil 500 kilómetros al sur de aquí.

En ese manifiesto, presentado en nombre de su partido, Bittel acusó al gobierno militar de violar los derechos humanos y de haber establecido un terrorismo de Estado en Argentina.

Mientras el juez de Santa Cruz quiere dar curso a una acción legal contra el manifiesto y todos aquellos que lo respalden, demostraciones de apoyo o rechazo al texto no cesan de manifestarse.

Varios dirigentes peronistas, la Agrupación de Mujeres Justicialistas, el Centro de Abogados de Buenos Aires y dirigentes democristianos manifestaron su solidaridad con el documento, mientras la Cámara Argentina de la Construcción y un ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires reafirmaron su apoyo a las Fuerzas Armadas.

"La subversión desató una guerra sucia y sin piedad ni misericordia para nadie", manifestó la Cámara de la Construcción, estimando que "el derecho a la defensa fue ejercicio legítimamente contra esos elementos subversivos".

Por su parte, el ex decano Raúl Zardini aseguró que "las Fuerzas Armadas emplearon luchas y métodos justos contra los adeptos de la doctrina marxista, la única capaz de transformar la lucha política en un odio criminal contra sus semejantes".

Zardini pidió a los argentinos que no "rechacen el deber de solidaridad hacia todos aquellos que dieron o arriesgaron sus vidas para salvarnos de la degradación marxista".

Entre tanto, 3 mil obreros de la fábrica metalúrgica Santa Rosa, en el conglomerado suburbano bonaerense, cumplieron hoy viernes un mes de total cese de tareas en demanda de mejoras salariales.

El conflicto se agravó ante el despido de 32 operarios, dispuesto por la empresa.